

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Ana Lucia Eusse Molina
DEMANDADOS	Consultores Asociados en Seguridad Social S.A.S y Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado Quinto Laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 <b>005 2019 00444</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 001 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Declaratoria de existencia de contrato laboral
DECISIÓN	Confirma sentencia

Hoy, **veinticinco de enero de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza, y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente a los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Ana Lucia Eusse Molina** en contra de la sociedad **Consultores Asociados en Seguridad Social S.A.S.**, al que se vinculó como coadyuvante a **Colpensiones** radicado único nacional 05001 3105 **005 2019 00444** 01.

**Auto:** De acuerdo con la documentación obrante en el expediente la cual fue remitida vía correo electrónico se reconoce personería a la abogada Sandra Milena Naranjo Salazar para asumir la representación de Colpensiones.

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado en sala

virtual mediante acta **Nº 001**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

Para lo que interesa a esta instancia, de acuerdo con lo decidido por el a quo y los recursos de alzada interpuestos, se tiene que la demandante convocó a juicio a la accionada pretendiendo se declare la existencia de un contrato de trabajo a término fijo, el cual inicio el 27 de julio de 2015 y finalizó el 12 de octubre de 2016, por renuncia motivada o despido indirecto, en consecuencia, se condene al pago de cesantías, intereses a las cesantías, sanción por el no pago de las mismas, prima de servicio, vacaciones, aportes a la seguridad social, indemnización por despido indirecto, sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y del artículo 65 del C.S.T, indexación y costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirma que fue contratada por la demandada el 27 de julio de 2015, para desempeñar el cargo de abogada, el cual se encaja en su objeto social consistente en asesoría jurídica en materia pensional, elaboración de cálculos actuariales, proyección financiera de pensionados, liquidación de cuotas partes pensionales, liquidación de bonos pensionales, indemnización sustitutiva de pensiones, liquidación de pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia, constitución de patrimonios autónomos, entre otros; que desarrolló las funciones de proyectar derechos de petición, demandas, recursos, acciones de tutela y demás escritos necesarios para iniciar y continuar los procesos de revisión permanente de demandas radicadas en los juzgados y tribunales a nivel nacional, entrega de estados y oficios de dichos procesos, revisar de manera personal y directa los procesos con movimientos en los juzgado para tener seguimiento y control, realizar entrega de memoriales, efectuar informes escritos y enviarlos vía email para control y seguimiento del contratante, brindar asesorías jurídicas permanentes a las entidades públicas y privadas, llenar los formatos suministrados por la demandada, viajar a Barranquilla a manejar el marco legal de la Alcaldía en dicha ciudad, así como la de Itagüí Antioquia, Cali - Valle y Fresno Tolima, entre

otras; que la prestación personal del servicio se dio de forma subordinada e ininterrumpida, al exigírsele el cumplimiento de horario de lunes a viernes de 8:00 a.m a 6:00 p.m, y eventualmente los sábados en el mismo horario, no obstante, la vinculación se dio por medio de dos contratos de prestación de servicios, el primero entre el 27 de julio y el 18 de diciembre de 2015, con una asignación mensual de \$1.800.000, y el segundo entre el 12 de enero y el 16 de diciembre de 2016, con un salario de \$2.200.000, interrupción que correspondió a las vacaciones colectivas de la empresa; que solicitó permiso para ausentarse de sus puestos de trabajo y el mismo fue concedido, empero, de manera intempestiva su empleador le indicó que debía cancelar su paseo o aplazarlo, pues, ya no se lo podía otorgar, por lo que ante dicha presión, procedió a presentar su renuncia el 12 de octubre de 2016; que recibió órdenes del dueño y representante legal de la empresa, cumplió el horario impuesto por el mismo en las instalaciones por él destinadas, en un cubículo que tenía solo para ella, con los elementos, herramientas e infraestructura que le proporcionaba y donde acataba las disposiciones dadas, sumado a que le tocaba portar uniforme, le pagaban los viáticos para desplazarse a efectos de cumplir con sus funciones; que no contaba con autonomía para adelantar los procesos judiciales, así como tampoco para tomar decisiones de carácter jurídico ni en las asesorías que prestaba a sus usuarios, pues, tenía que ceñirse a las directrices de su empleador y acatar las órdenes que le impartía por equivocadas o contrarias a su conocimiento, sin poder llegar tarde o ausentarse de su puesto de trabajo, pues, de tener alguna dificultad tenía que pedir autorización de su empleador; que durante el lapso en que se desarrolló la relación laboral, nunca fue afiliada a seguridad social y tampoco se le cancelaron las prestaciones sociales al momento de la terminación del contrato.

En auto del 10 de septiembre de 2019 se admitió la acción y se ordenó la vinculación como coadyuvante de Colpensiones, debidamente notificadas las partes allegaron pronunciamiento así:

**Consultores Asociados,** aceptó la vinculación de la demandante a través de dos contratos de prestación de servicios, y los honorarios pactados, aclarando

que los mismos eran cancelados siempre y cuando se presentara el informe y avance del contrato, cuyo objeto era representar jurídica y administrativamente a la sociedad ante entidades públicas, contratados por esta y que se encontraban fuera de la sede de la entidad, así como ejercer representación judicial ante juzgados y tribunales fuera de la ciudad de Medellín, lo cual desvirtúa la afirmación tendiente a que permanecía trabajando en el cubículo asignado, resaltando que los movimientos propios de la revisión de procesos y las asesorías jurídicas a las entidades públicas la realizaba la actora de manera independiente y autónoma, debiendo presentar solo los informes de su gestión una vez terminara, tal y como se estableció en la cláusula sexta del contrato, la cual constituía requisito indispensable para acceder al pago de honorarios. Afirma que el desplazamiento que realizaba la actora la hacían independiente frente al cumplimiento de horarios, o alguna clase de subordinación, al tener espacio en la oficina, solo en los eventos en los cuales debía presentar informes, no tenía jefe, ni coordinador alguno, ejercía de manera autónoma la estrategia jurídica que debía de implementar en cada caso, no se le suministraba uniforme, pues, ello solo se da frente a las personas que tienen contrato de trabajo, debiéndose considerar por demás que la celebración de estos vínculos demuestra la no existencia de una continuidad, tal y como lo debe conocer la demandante dada su formación profesional. Esgrime que a la actora no se pagaba salario, ni prestaciones sociales, ni seguridad social, dada la naturaleza del vínculo que los unió, aclarando por demás, que la misma renunció de manera voluntaria, y no por habersele negado un permiso, en tanto, nunca tuvo que solicitarlo al ser autónoma en el manejo de sus tiempos contractuales.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y formuló las excepciones que denominó inexistencia del contrato de trabajo, de las obligaciones demandadas, de la terminación sin justa causa de un contrato de trabajo, y prescripción.

**Colpensiones**, manifestó no constarle ninguno de los supuestos de hecho narrados, sin embargo, frente a las pretensiones, indicó que se adhería a lo

expuesto frente al pago de aportes, proponiendo las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación de recibir los aportes a seguridad social en pensiones hasta que se acredite la existencia de la relación laboral y/o un mayor valor de los aportes, inexistencia de responsabilidad frente al no pago de aportes a la seguridad social o pago deficitario, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, y la genérica.

### **Decisión de primera instancia**

Contenida en sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, en la que declaró la existencia de relación laboral entre la señora Ana Lucia Eusse Molina y la sociedad Consultores Asociados en Seguridad Social, entre el 27 de julio de 2015 y el 12 de octubre de 2016, en consecuencia, condenó a la demandada a reconocer y pagar la suma de \$2.526.667 por cesantías, \$330.917 por intereses a las cesantías, \$658.056 por prima de servicios, \$1.392.778 por vacaciones, estas debidamente indexadas y \$55.200.000, por indemnización moratoria causada desde el 12 de octubre de 2016 hasta el 11 de octubre de 2018 (24 meses). A partir del día 12 de octubre de 2018 y hasta que se realice el pago de las citadas prestaciones, la accionada deberá liquidar, reconocer y pagar los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida sobre el valor de las prestaciones sociales (\$3.515.640), y hasta que se verifique el pago de lo adeudado. Condenó a la sociedad demandada a cancelarle a Colpensiones los aportes a pensiones durante el tiempo que perduró la relación laboral, debiendo Colpensiones realizar el cálculo actuarial, recibir las sumas y convalidarlas en la historia laboral. Declaró probada de manera parcial la excepción de prescripción e impuso costas a la vencida.

Concluyó el fallador, después de realizar un análisis de cada una de las pruebas obrantes en el expediente y en especial de la testimonial, que la demandada no cumplió con la obligación de demostrar que la relación no era vertical sino horizontal o de una índole ajena al objeto social y a la naturaleza laboral,

evidenciando para el caso los tres elementos que la componen, esto es, una prestación de servicios, la cual, fue subordinada y remunerada, en la que se le facilitó a la actora un carnet, le cancelaron gastos de viaje, desarrollo sus funciones con herramientas, minutas, objetos, muebles y equipos que le suministraba la empresa demandada, se le asignaron funciones determinadas y específicas, las cuales se estipularon también en su contrato, y se desarrollaban dentro del objeto social de la empresa, el cual consiste en la representación judicial y asesoría jurídica de entidades privadas y públicas, se le impartieron ordenes, directrices, instrucciones jurídicas por parte del señor Gustavo Sánchez, el cual también tenía una potestad disciplinaria; la actora también tenía que cumplir un horario de trabajo, portar uniforme, por lo que no era posible hacer uso del contrato de prestación de servicios, debiéndose dar aplicación a lo establecido en el artículo 24 del C.S.T. y los artículos 1, 2, 25 y 53 de la Constitución Política, a fin de proteger el derecho al empleo en condiciones dignas y justas, aclarando, que si bien no se desconocía que se presentó una interrupción, la misma no es de relevancia, al coincidir con un periodo de vacaciones, debiendo por ello, cancelar la demandada, las prestaciones sociales, cesantías, intereses a las cesantías dobladas, primas de servicio, vacaciones correspondientes al tiempo laborado, debidamente indexadas, y frente a las cuales no haya operado el fenómeno de la prescripción, liquidando las mismas atendiendo el valor de los honorarios que fueron pagados a la demandante, aplicando para el cálculo, el fenómeno extintivo de la prescripción, el cual hizo aparición, al haber finalizado el vínculo el 12 de octubre de 2016, y la demanda presentarse el 2 de febrero de 2019.

Afirmó que para el caso no se avizoraba la presencia de buena fe en el actuar de la demandada, a fin de exonerarla del pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del C.S.T., en tanto, tenía contratados más de 20 profesionales por prestación de servicios, cuando su vinculación debió haberse dado por contrato de trabajo, dada su calidad y el objeto social, a más que ello no se dio de manera temporal.

Absolvió del pago de la sanción por despido indirecto al considerar que la renuncia se presentó por iniciativa de la actora y de manera pura y simple, no imputable a la demandada.

## **Recursos de apelación**

Oportunamente interpuesto por los apoderados de las partes:

**Demandante:** se mostró inconforme con la declaratoria de la prescripción, para ello indicó que la misma no se puede acoger de manera oficiosa por parte del fallador, y la demandada al contestar, se limitó a anunciar que proponía tal medio exceptivo, sin indicar si era previa o de fondo, para que tipo de pretensiones la estaba formulando o para que situación, por lo que al no haberse interpuesto de manera correcta, y alegada en la forma indicada por el Código General del Proceso, no es procedente declararla probada, pues, ello constituye una manifestación oficiosa, por lo que se deben reconocer los intereses a las cesantías, prima de servicios, y la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las cuales fueron afectadas por dicho fenómeno

**Demandada:** aduce que de la prueba aportada y en especial de la testimonial, no se puede concluir que para el caso hizo presencia un contrato de trabajo, máxime si se tiene en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral determinó que portar carnet, así como entrar y salir de la empresa, y llevar un registro de ello, estar sometido a una auditoria mensual por una disposición de la compañía, no constituyen elementos inequívocos de subordinación propios de un vínculo laboral, pues, componen mecanismos de seguridad y de control de un contrato de prestación de servicios, así como tampoco las órdenes dadas por el señor Gustavo Sánchez, pues, corresponden a una coordinación de actividades entre contratante y contratista, necesarias

para el desarrollo eficiente y productivo de la actividad encomendada, lo cual, también puede implicar el cumplimiento de horario y el reporte de informes.

Afirma que la empresa no puede tener planta de cargos, en tanto, no tiene un objeto social y comercial continuo, por lo que debe acudir a personal externo y especializado para poder desarrollar su objeto social, el cual, depende de terceros que son contratistas, por tal, no hay contratos de trabajo.

Dando aplicación a lo establecido en el artículo artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, se le corrió traslado a las partes para alegar, haciendo uso de ellos, **Colpensiones**, quien indica que al haberse presentado incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador, derivada de la relación laboral, esto es, el pago de aportes a la seguridad social, este deberá cancelar un cálculo actuarial, con la finalidad de que dichas semanas se contabilicen en la historia laboral del afiliado tal y como lo determinó el juez de instancia.

Siendo esta la oportunidad para ello se procede al pronunciamiento de fondo, previas las siguientes,

## **Consideraciones**

Atendiendo a los planteamientos de los recurrentes, **el problema jurídico**, corresponde a inicialmente establecer la naturaleza de la relación jurídico sustancial que ligó a la señora Ana Lucía Eusse Molina con la demandada, esto es, si existió una relación laboral o por el contrario, los unieron contratos de prestación de servicios; en caso de confirmarse la decisión de primera instancia se examinará lo referente a la declaratoria de prescripción.

Al respecto debe decirse que para la existencia de un contrato de trabajo realidad, se requiere que concurren los elementos esenciales que contempla el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, ello con independencia de lo que



aparezca en los documentos relativos al contrato de prestación de servicios que hayan celebrado las partes, debiéndose tener en cuenta la garantía a favor del trabajador prevista en el artículo 24 *ibídem* sobre la presunción del vínculo laboral, la cual puede ser desvirtuada por el supuesto empleador.

Así, el principio protector de la primacía de la realidad, consistente en darle prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica, más que a la forma que resulte del documento contractual o cualquier otro que hayan suscrito o expedido las partes, lleva necesariamente a sostener que son aquellas particularidades que se extraen de la realidad las que se deben tener en cuenta y no otras a fin de determinar el convencimiento transparente del juez con respecto a los servicios prestados por una persona natural y que se reclaman en una acción judicial, que configuren un contrato de trabajo.

De ahí que, para la estructuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada, y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: "*Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo*", la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral.

Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es al empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado quien

presta el servicio, que se traduce en un traslado de la carga probatoria, lo cual tiene fundamento en el carácter tuitivo o protector de las normas del derecho al trabajo, que le otorgan a quien alega su condición de trabajador, una ventaja probatoria consistente en probar la simple prestación del servicio a una persona natural o jurídica, para que se presuma esa relación contractual laboral. Sobre el particular véanse las sentencias SL4027-2017 y SL 365 de 2019.

Ahora, es dable indicar que el contrato de prestación de servicios, que puede revestir diferentes denominaciones, se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo que lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades; no obstante, este tipo de contratación no está vedado a una adecuada coordinación en la que se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. Lo importante, es que dichas acciones no desborden su finalidad, al punto de convertir tal coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo, sumado a que dentro de este contrato, por lo general, el contratista desempeña sus actividades con sus propias herramientas, equipos o medios; sin embargo, bajo ciertas y particulares circunstancias es posible que esa actividad autónoma e independiente se desarrolle en las instalaciones del contratante, con elementos de su propiedad, necesarios para la ejecución de la labor encomendada (sentencia SL4347 de 2020).

Atendiendo lo expuesto, y dado que para el caso se somete a juicio el principio de la realidad sobre las formas a fin de establecer el contrato de trabajo, le corresponde a la Sala, sin desconocer los principios tuitivos del derecho laboral, analizar las particularidades de cada caso, los cuales adquieren mayor relevancia, dado que la controversia se da entre una abogada y una sociedad encargada de brindar asesorías jurídicas, teniéndose que no existe discusión con relación a la **prestación personal del servicio**, por cuanto efectivamente la

demandante fue contratada por la sociedad Consultores Asociados en Seguridad Social S.A.S, con el objeto de que prestara sus servicios como "abogada" y así es aceptado en el escrito de contestación (Fl. 69 a 71, 75 a 77, 153 a 159 del expediente digital).

De igual manera está demostrado, el elemento de **remuneración por trabajo cumplido**, como quiera que en los contratos de prestación de servicios, visibles en folios 69 a 71, 75 a 77 y 153 a 159 del expediente digital se estipuló en la cláusula sexta de estos, "*VALOR Y FORMA DE PAGO: El pago total de esta orden será por las suma de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M.L (\$24.540.000.00) /.../ los honorarios que asciende a suma mensual de los honorarios de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$2.200.000) los cuales se abonan en sumas de UN MILLON CIEN MIL PEOS M.L. (\$1.100.000.00) quincenales o la fracción correspondiente al tiempo de servicio prestado...*", lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).

Y en relación con la **subordinación**, como último elemento de la relación laboral, se advierte del material probatorio que la demandante pese a vincularse como abogada mediante contrato de prestación de servicios celebrados bajo los principios del contrato civil, la ejecución de su actividad implicó la prestación de sus servicios intelectuales de manera directa y sin independencia en el cumplimiento de su labor, pues debió cumplir con los parámetros fijados por la empresa donde prestaba sus servicios generándose así una dependencia y subordinación con la entidad para la cual trabajaba, nótese como en los contratos se estableció, en la cláusula tercera, en las obligaciones del contratista: "*proyectar derechos de petición, demandas, recursos, acciones de tutela y demás escritos necesarios para inicial y continuar los proceso /.../ Revisar personalmente los procesos con movimientos directamente en los juzgados para tener seguimiento y control /.../ entre otras, y en la cláusula octava "la presente orden se celebra en consideración a las calidades personales de EL CONTRATISTA, por consiguientes esta no podrá ceder la misma a persona alguna".*

Ahora, el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada, indica que en la empresa siempre han tenido 3 o 4 personas vinculadas de manera directa, como la del aseo, la secretaria y la que hace las diligencia, los demás profesionales tienen contrato por prestación de servicios, al depender su vinculación de los contratos que se realicen con las entidades a las cuales se asesoran; que la demandante tenía uniforme, el cual, se le entregaba para que se pudiera presentar a las entidades, a más que llevaba un carnet que la identificaba como contratista.

La testigo **Yennifer Cuello**, aduce que estuvo en Consultores Asociados entre 19 y 20 meses, de abril o mayo de 2016 a diciembre de 2017, siendo contratada por prestación de servicios, al igual que los aproximadamente 20 abogados que también estaban; que la demandante tenía que cumplir un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, en las oficinas de la empresa, en un puesto asignado para tal fin, con los elementos dados por el señor Gustavo Sánchez, como computador, lapiceros, tenía correo institucional, uniforme, carnet; que recibía órdenes de Gustavo Sánchez, y en caso de tener una cita médica, debía pedir permiso; que Ana, debía brindar asesoría permanente a las entidades públicas contratadas por consultores, en los horarios de dichas entidades, el cual coincidía con el de la oficina, a más que le tocaba viajar a Barranquilla y Fresno Tolima, cubriendo el señor Gustavo los gastos en que incurría en su desplazamiento; que no podían extraer información de la oficina; que en la entrada de la oficina había una máquina la cual registraba el horario de ingreso y salida; que la actora no podía emitir conceptos jurídicos o apreciaciones frente a casos, pues, los mismos se resolvían tal y como decía el señor Gustavo, por lo que no existía autonomía profesional; que presentaran o no cuenta de cobro, siempre se daba el pago de los honorarios, a más que tampoco tenían que allegar constancia de pago de la seguridad social; que semanalmente, los viernes, tenían que presentar informe de lo que hacían; que recuerda que Ana Lucia pidió permiso para irse para un viaje, accediendo el señor Gustavo a darle

el mismo, no obstante, dos días antes de ello le dijo que no podía ausentarse del puesto, lo cual, la obligó a presentar carta de renuncia; que no sabe si el musculo de la empresa, resistía estar sin contratos estatales para tener vinculadas las personas, no obstante, le consta, que el personal ingresaba en enero y los contratos se materializaban en febrero o marzo, sumado a que cuando ella entró estaban los mismos abogados y no tenían contrato con tantas entidades públicas.

**Brenda Parra Ríos**, indica que labora desde el 11 de abril de 2016 en Consultores, retirándose del 30 de septiembre a diciembre de 2016 a realizar unas diligencias universitarias; que le consta que Ana Lucia debía trasladarse a varios Municipios, permaneciendo por fuera de la entidad y regresando a la misma solo a rendir informes; que la empresa les ponía días para ir a llevar los informes, por lo que no siempre coincidía con la actora en la oficina; que la demandante manejaba el tema pensional de los empleados y exempleados de las entidades públicas contratadas, facilitándole la demandada un portátil, a fin de que pudiera realizar las actividades desde el lugar donde se encontrara, y si necesitaba papelería o lo que fuera, también se las suministraban; que no contaban con escritorio asignado, sino que llegaban a rendir informes y cogían el que estuviera desocupado, no tenían horario; que Ana portaba uniforme, pero no cree que carnet, porque ella no lo tenía; que no le constan las razones de la renuncia de la actora, pues, ella no estaba en la sociedad para ese momento; que el número de personas contratadas en la empresa depende de la cantidad de convenios con las entidades públicas; que para el 2016 eran más o menos 17 personas, de las cuales, tenía contrato de trabajo la señora de oficios generales; que Ana no recibía órdenes del señor Gustavo, en tanto, cada uno tenía muy presente cuales eran las obligaciones que tenía que cumplir, al estar las mismas consignadas en el contrato, o por lo menos nunca escuchó que le dijera que tenía que hacer, sin constarle si le dieron directrices en el tiempo en el cual ella se ausentó; que las personas que se encuentran en la empresa no tienen la capacidad para llevar a cabo todas las actividades, por lo que tienen

que contratar personas externas para dar cumplimiento al objeto contractual, sin recordar cuales están por contrato de trabajo aparte de la señora del aseo, pero si, que todos los abogados, estaban por prestación de servicios; que para desarrollar el objeto social, la entidad se valía de abogados; que para entrar a la oficina tenían que poner la huella a la entrada.

**Rubén Becerra Builes**, tecnólogo en administración pública, y quien laboró para Consultores Asociados por tres años, siendo compañero de Ana por 7 meses, hasta febrero de 2016, cuando salió, indicó que le consta de manera personal y directa que la demandante recibía órdenes y directrices de como ejecutar su labor, de parte del señor Gustavo Sánchez, esto es, como ejecutar, configurar, direccionar y manejar cada caso, así como debía referirse a los clientes, ejecutando su labor en la sede de la demandada, la cual, estaba ubicada en Ciudad del Rio, en un cubículo cercano al de él, el que contaba con computador, escritorio, elementos de oficina y los expedientes que debía manejar y eran asignados por Gustavo; que todos en la oficina portaban carnet, y tenían un horario de 8 a.m a 6 p.m de lunes a viernes, debiendo registrarse al momento de entrar y salir, poniendo su huella digital en una maquina, la que dejaba consignada la hora; que todos debían entregar informes semanales, y sin ellos no podían acceder al pago quincenal; que sabe que Ana le solicitó dos permisos por temas familiares al señor Gustavo, el cual era el encargado de concederlos o no; que ni la actora ni nadie podía delegar las funciones asignadas; que para la época en la que estuvo en Consultores habían por lo menos 20 personas contratadas por prestación de servicios, y también tenían otras tres personas externas, entre ellas el abogado que representa a la empresa en este proceso, los cuales solo laboraban por fuera de la sociedad y solo cuando la misma los requiere; que la empresa para desarrollar su objeto social se valía de abogados, ingenieros de sistemas, economistas y otros profesionales, sin que ninguno tuviese contrato laboral; que no les entregaban computadores portátiles, pues todos tenían un cubículo asignado para trabajar; que la sociedad en sus 25 años de existencia ha tenido frecuencia y continuidad

en cierto número de contratos con entidades públicas, lo cual, implica tener un cierto número de empleados.

**Yuliana Marcela Callejas Loaiza**, técnica en contabilidad y quien labora en Consultores desde el 13 de abril de 2009, teniendo una interrupción de diciembre de 2013 a mediados de 2014, manifestó que la contratación de personal en Consultores depende del número de convenios realizados con entidades públicas, correspondiéndole a la demandante viajar a Barranquilla, Fresno Tolima, Bogotá e Itagüí a ejecutar sus labores, rindiendo un informe mensual cada que iba, encontrándose con ella en la oficina cuando se presentaba a entregar el mismo, sin que tuviera que ir más tiempo o cumplir un horario; que a Ana se le prestaba, al igual que a todos, un cubículo cada que iba a rendir informes, el cual contaba con computador, lapiceros y papelería, pues, el reporte de las entidades debía ir con membrete; que la actora podía sacar los expedientes de los casos que estaba llevando, existiendo un control de salida de los mismos; que para el 2015, habían 4 personas con contrato de trabajo, la persona del aseo, la secretaria y dos comerciales; que Ana no recibía órdenes, en tanto, en el contrato estaban estipuladas las labores a realizar, correspondiéndole a ella ejecutar lo relacionado con reclamaciones y procesos de pre pensionados, labores que fueron asignadas por el señor Gustavo; que los contratistas debían portar uniforme y carnet por un tema de imagen y distintivo de la empresa, dada la naturaleza de las entidades con las cuales tiene convenios; que ella iba aproximadamente cada 15 días a la empresa, constándole que Ana realizaba viajes y se llevaba expedientes, porque los compañeros se lo manifestaban, y porque cuando ella iba, en ocasiones ella estaba allá; que los 9 años que lleva trabajando en la Consultores, siempre ha desarrollado la labor de liquidación de bonos pensionales.

Los anteriores medios de convicción se exhiben como incontrastable demostración de que el nexo jurídico que medió entre las partes se caracterizó por la dependencia de la trabajadora, respecto del personal directivo de la

empresa, para ser más específicos, del señor Gustavo Sánchez, de quien recibió órdenes e instrucciones frente a la forma de ejecutar su labor, las respuestas que debía emitir y como lo debía realizar, sumado a que se le facilitó un espacio físico para que cumpliera con las obligaciones contraídas al momento de la celebración del contrato, se le suministró un computador, elementos de trabajo, papelería y se le cancelaron los gastos en que incurrió en los traslados que debía realizar a Barranquilla y a Fresno Tolima, cumplía horario, y tenía que pedir permiso para ausentarse, constituyéndose, incluso, la negativa por parte del señor Gustavo a que realizara un viaje, después de haberlo autorizado, en la razón de la renuncia de la actora, y si bien no se desconoce que las señoras Yuliana y Brenda indican que no se impartían ordenes, ni directrices, pues las mismas eran claras en el contrato de trabajo, también lo es, que en el mismo no consta que la actora debía viajar a atender actividades en Departamentos y Municipios diferentes al lugar donde suscribió el contrato, lo cual fue confesado incluso en la contestación de la demanda, a más que las mismas, afirman que no iban con frecuencia a la oficina, supuesto, que si aseveraron los demás deponentes, Jennifer y Rubén, quienes de manera categórica indican que recibieron órdenes y directrices frente a la ejecución de la labor, en un horario, en las instalaciones de la demandada y con los instrumentos por esta brindados, por lo que, como ya se anunció, la Sala no avizora autonomía e independencia de la actora, en la firma y el desarrollo de un contrato de prestación de servicios, no lográndose desvirtuar la presunción legal consagrada en el art. 24 del Código Sustantivo del Trabajo de existencia de relación laboral, pues las actividades ejecutadas revisten las características propias de un empleo de carácter permanente en una oficina de abogados cuyo objeto social es "*la asesoría jurídica en materia pensional*", sin que en ningún momento se hubiese presentado este tipo de vinculación frente a una ninguna persona, cuando incluso, una de las testigos lleva trabajando de manera continua en la sociedad más de 9 años, por lo cual es procedente acceder al reconocimiento de la existencia de una relación laboral, aplicando el principio de "*la primacía de la realidad sobre formalidades*".



Ahora, es de aclarar, que si bien no se desconoce que aún en los contratos de prestación de servicios es posible que se establezca un horario para llevar a cabo la actividad acordada, así como otros parámetros de modo o lugar, sin que ello implique que se torne en una relación de trabajo subordinada, tal y como se afirma en el recurso de alzada, y se explica por la Jurisprudencia especializada, también lo es que dicho órgano ha indicado que, tales circunstancias no deben desbordar la naturaleza del acuerdo contractual, que es precisamente lo que ocurre en el caso de estudio por cuanto una disponibilidad horaria diaria de lunes a viernes de 8:00 a.m a 6:00 p.m, la cual coincide con el horario de las entidades públicas que visitaba en otras Departamentos, claramente denota la subordinación en oposición a la plena autonomía e independencia

De igual modo, pese a que en este tipo de contratos no está vedado que en función de una adecuada coordinación, el contratante establezca algunas pautas para la prestación del servicio, estas tampoco deben desbordar su finalidad; en dicha perspectiva, aunque puede exigirse el cumplimiento de las obligaciones pactadas así como ciertas responsabilidades connaturales al objeto contractual, insoslayablemente, debe prevalecer la autonomía e independencia del contratista, máxime cuando para el caso se requiere de un conocimiento especializado en derecho, no pudiendo la demandante, según lo establecido en la prueba, dar su criterio jurídico, emitir un concepto, sino que debía acatar lo que el señor Gustavo le dijera, estuviere o no de acuerdo con ello, quien por demás le indicaba que debía decirle a las personas de las entidades públicas con las que él contrató, por lo que se confirma la sentencia de instancia en este apartado.

Así las cosas, se pasa a analizar lo relativo a la inconformidad frente a la declaratoria de prescripción, la cual se basa, en que la misma no debió acogerse al no fundamentarse tal y como lo exige el Código General del Proceso, frente a lo que vale indicar que si bien la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral ha advertido, entre otras, en la sentencia SL2194 de 2018, que las

excepciones que pretende hacer valer el demandado deben estar debidamente sustentadas, en la medida en que tal exigencia propende no solo garantizar la igualdad entre las partes, sino también el debido proceso, pues con ello se le permite a la parte demandante ejercer su derecho a la defensa, también lo es, que ha considerado de manera reiterada que, tratándose de la excepción de prescripción, su planteamiento no requiere de una motivación especial, tal y como puede leerse en la sentencia radicado 40404 de 2012, reiterada en las SL17165 de 2015, SL2194 de 2018, SL1368-2019, SL5019 de 2019 y SL3152 de 2020, en las que ilustra:

**3º) Falta de fundamentación de la excepción de prescripción.**

*No desconoce la Corte Suprema de Justicia que fue querer del legislador que las excepciones que pretenda hacer valer la parte demandada deben estar debidamente fundamentadas, ya que así lo dejó plasmado expresamente en el numeral 6º del artículo 18 de la Ley 712 de 2001.*

*/.../*

*Empero, también brota insoslayable la circunstancia de que en tratándose de la **excepción de prescripción**, tal como lo ha enseñado de antaño esta Corte, su planteamiento no requiere de motivación especial, **pues dada su propia naturaleza** se sobreentiende que con su invocación se quiere significar simplemente que los derechos pretendidos no fueron reclamados dentro de los términos previstos por la ley para que puedan ser exigibles judicialmente al empleador (sentencia del 30 de septiembre de 2002, radicación 18671). De ahí la vieja doctrina extranjera, citada en la sentencia del 11 de enero del 2000, radicación No. 5208, Sala de Casación Civil, soportada en que "derecho que no se manifieste equivale a un derecho que no existe, porque lo cubre el olvido y lo sepulta el silencio de los años".*

De acuerdo con lo expuesto, el fundamento del recurso de alzada de la parte actora no tiene vocación de prosperidad, en tanto, como se enunció, no es requisito para el adecuado planteamiento de la excepción de prescripción la ritualidad que se aduce, dado que basta con simplemente enunciarla, **pues dada su propia naturaleza** se sobreentiende que con su invocación se quiere significar simplemente que los derechos pretendidos no fueron reclamados dentro de los términos previstos por la ley, expresamente establecidos en materia laboral en los artículos 488 del Estatuto Sustantivo y 151 del Estatuto Procesal.

Sin costas en esta instancia ante la no prosperidad de los recursos interpuestos.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por **Ana Lucia Eusse Molina** en contra de la sociedad **Consultores Asociados en Seguridad Social S.A.S.** trámite al que se vinculó como coadyuvante a **Colpensiones**.

Sin costas en esta instancia ante la no prosperidad de los recursos interpuestos.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el 15 del Decreto 806 de 2020.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
**LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL**  
Magistrada

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

**Certifico:** Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 011** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín **26 de enero de 2021.**

\_\_\_\_\_  
Secretario